



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO CINCUENTA Y CUATRO CIVIL MUNICIPAL

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021)

PROCESO: 11001 – 4003 - 054 – 2019– 00309-00

DEMANDANTE: **COOPERATIVA CASA NACIONAL DEL PROFESOR “CANAPRO”**

DEMANDADO: **CINDY TATIANA CASTAÑEDA ROMERO y FRANCISCO CASTAÑEDA MEDICA**

PROCESO: **EJECUTIVO**

ASUNTO: **SENTENCIA**

Procede el Juzgado a dictar sentencia, siendo la oportunidad procesal para ello y no observándose causal de nulidad capaz de invalidar la actuación.

I. ANTECEDENTES

A. La pretensión y los hechos

En libelo incoativo de este juicio, la entidad demandante **COOPERATIVA CASA NACIONAL DEL PROFESOR “CANAPRO”**, demandó a **CINDY TATIANA CASTAÑEDA ROMERO y FRANCISCO CASTAÑEDA MEDICA**, con el objeto de que se librara mandamiento de pago a su favor a través de la senda ejecutiva singular de menor cuantía, por las siguientes sumas de dinero contenidas y derivadas del pagaré N° **114950200**, base de la acción.

1. **\$1.413.868**, por concepto de cuotas de capital vencidas y no canceladas.
2. Por los intereses moratorios causados desde la fecha de exigibilidad de cada cuota hasta que se verifique el pago, liquidados sobre el capital referido en el numeral anterior a la máxima fluctuante legal permitida.
3. **\$13.408.303**, por concepto de los intereses de plazo liquidados sobre el capital de las cuotas vencidas y no pagadas.
4. **\$71.978.076**, como capital insoluto de la obligación contenida en el pagaré base de la acción.
5. Por los intereses moratorios causados desde la fecha de presentación de la demanda hasta que se verifique el pago, liquidados sobre el capital referido en el numeral anterior a la tasa máxima fluctuante legal permitida.

Sirven de sustento a las anteriores pretensiones, los argumentos fácticos que a continuación se sintetizan:

La parte demandada suscribió a favor de la entidad demandante el pagaré N° 114950200, en virtud de un contrato de mutuo celebrado, donde se pactaron intereses de plazo y moratorios, además que en caso de incumplimiento se podría extinguir el plazo y exigir la totalidad de la obligación debida. Pese a lo anterior, la parte demandada se ha sustraído de manera injustificada de cancelar las obligaciones debidas.



B. Síntesis Procesal

Mediante providencia del 4 de abril de 2019 (Fl. 18 C. 1), se libró mandamiento de pago conforme con lo solicitado en la demanda.

La demandada **CINDY TATIANA CASTAÑEDA ROMERO**, se notificó del presente asunto de manera personal el 7 de junio de 2019, quien dentro del término de traslado procedió a contestar la demanda, proponiendo como excepciones de mérito las que denominó **Novación** y **cobro de lo no debido**, cuya motivación se tocará en la parte motiva de este fallo.

En lo que toca al demandado **FRANCISCO CASTAÑEDA MEDICA**, se notificó del presente asunto a través de aviso, de conformidad con el artículo 292 del Código General del Proceso, quien, dentro del término de traslado, guardó silencio.

En auto del 18 de octubre de 2019 (fl 77 c1), se abrió el presente asunto a pruebas, señalando fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de que trata el artículo 372 del Código General del Proceso, misma que se adelantó el 14 de julio de 2021, donde se desarrollaron las etapas señaladas en dicha preceptiva.

II. CONSIDERACIONES

1. Sea lo primero decir, que surtido el trámite pertinente, es procedente dirimir de fondo el litigio, puesto que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos en el presente proceso y, además no se observa causal de nulidad que pueda invalidar la actuación surtida.

2. Ahora bien, en lo que toca a los presupuestos de la acción se tiene que se ejerce una acción cambiaria directa derivada del pagaré N° **114950200**, suscrito por la parte demandada y a favor de la demandante **COOPERATIVA CASA NACIONAL DEL PROFESOR “CANAPRO”**, que en su validez y forma reúne todas las condiciones a que se refieren los artículos 619, 620, 621, 622, 625 a 627 y 709 a 711 del Código de Comercio y artículo 422 del Código General del Proceso.

Lo anterior ateniendo que, el artículo 422 del Código General del Proceso, señala que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley.

De la norma en comento se deriva, además, que los títulos ejecutivos deben gozar de dos tipos de condiciones: formales y sustanciales. Las primeras exigen que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación (i) sean auténticos y (ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme.



Y las segundas, exigen que el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una persona. Es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar, o de no hacer, que debe ser clara -es decir, que no dé lugar a equívocos como cuando están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan-, expresa -esto es que en la redacción misma del documento aparece nítida y manifiesta la obligación- y exigible -lo que ocurre cuando su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición, o que estándolo, la misma ya acaeció.

Así, cuando el título ejecutivo consta a su vez en un título valor, este además debe satisfacer los requisitos generales de todo documento cartular que se encuentran contemplados en el artículo 621 del Código de Comercio: **(i) la mención del derecho que en el título se incorpora**, y **(ii) la firma de quién lo crea**, amén de los que de manera concreta exige la reglamentación mercantil para el instrumento en específico. En tratándose de pagaré, **reza el canon 709 del Estatuto Mercantil que aquellos deben contener**; (i) La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero; (ii) El nombre de la persona a quien deba hacerse el pago; (iii) La indicación de ser pagadero a la orden o al portador; y (iv) la forma de vencimiento.

3. En consecuencia el Despacho dispone a dar trámite a las excepciones de mérito propuestas y denominadas **“Novación”** y **“cobro de lo no debido”**, las cuales se tramitarán en conjunto al guardar una misma fuente argumentativa basada en que, *en virtud de los trámites adelantados por el extremo demandado al suscribir el 21 de octubre de 2016 el pagaré N° 11450200, recogiendo un crédito anterior que estuviera a nombre de la señora Lilia Aurora Romero, además el señor Francisco Castañeda suscribió un pagaré para recoger dos obligaciones, la conocida con el pagaré N° 11463104, que fuera suscrito el 21 de octubre de 2016, por valor de \$85.000.000 y la garantizada con el pagaré N° 114950200, sin perjuicio de que al ser autorizada la nueva obligación que garantizó únicamente Francisco Castañeda con el pagaré N° 134291700, por valor de \$186.177.263, el 5 de septiembre de 2018. De esta manera, estando cancelado el pagaré N° 11450200, no media deuda que cancelar por la demandada **Cindy Tatiana Castañeda Romero**.*

Para resolver, es necesario destacar que el artículo 165 del Código General del Proceso, establece que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso; a su vez, el artículo 167 *ejusdem*, prevé que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, se trata por tanto de una carga procesal, de carácter probatorio, inherente a las partes, y cuyo incumplimiento puede generar, al titular del deber, consecuencias desfavorables al interior del proceso judicial, norma que no hace referencia a circunstancia diferente a la de probar los hechos que se alegan al interior de la actuación, en tratándose procesos contenciosos, tanto los que sirven de base para sustentar la demanda como los que se alegan por la contraparte por vía de excepción.

Dentro del presente proceso ejecutivo, se demanda el pago del título contenido en el pagaré N° **114950200**, centrándose la censura en la extinción de la obligación incorporada en ese instrumento en virtud de la suscripción del pagaré N° 134291700; de esta manera, resulta perentorio recordar que, la novación es un modo de extinción de las obligaciones (artículo 1625 del Código Civil), consistente en la sustitución de una obligación por otra, en virtud de lo cual la primitiva queda extinguida (artículo 1687 del Código Civil). Al tenor del artículo 1690 *ibídem*, la novación reviste dos modalidades: subjetiva y objetiva, según que el cambio de obligación esté determinado por el reemplazo del acreedor o del deudor, o bien por el objeto de esta.



Sobre este particular, la Sala de Casación Civil ha indicado que *"No hay novación si no hay sustitución de una obligación a otra anterior..."*¹, argumento que se reitera en el inciso primero del artículo 1693 del Código Civil, el cual señala que *"para que haya novación es necesario indubitadamente que su intención ha sido novar porque la nueva obligación envuelve la extinción de la antigua"*, en tanto que de no mediar ese elemento intencional de novar, ***"se mirará las dos obligaciones como coexistentes, y valdrá la obligación primitiva en todo aquello en que la posterior no se opusiere a ella, subsistiendo en esa parte los privilegios y cauciones de la primera"***.

De suerte que la voluntad de novar entre las partes **debe mostrarse diáfana, clara, sin ningún género de duda o equivocidad, pues esa intención de novar no puede aflorar como consecuencia de una labor acuciosa de interpretación ni de inventos o elucubraciones forzadas. Debe poder captarse prístinamente**². (Negrilla por el Despacho)

Con el caudal probatorio arrimado a lo largo de la instancia, rápidamente se desvanece la defensa argüida por la parte ejecutada, en cuanto a la extinción de la obligación que aquí se ejecuta y que se encuentra inmersa en el título valor base de esta acción ejecutiva, pues en el presente caso, se evidencia que los extremos de esta litis han sostenido múltiples negocios, pero no por ello, puede concluirse que la intención de las partes en estos acuerdos se centró en concretar una sola obligación.

Lo anterior, surge palmario en cuanto a la ausencia de novación de la obligación ejecutada; por cuanto, si bien se intentó adelantar esa forma extintiva al suscribirse el pagaré N° 134291700, lo cierto es que dicho instrumento cuenta con manuscrito de "anulado"³, los estados de cuenta no reflejan dicho instrumento como pendiente de pago⁴, como si acontece con el que actualmente se ejecuta, tan es así lo que se viene diciendo que, la líder de cobranzas de la entidad demandante procedió a emitir certificación con destino a esta sede judicial, en donde manifiesta lo siguiente:

"Que los señores Castañeda Romero Cindy Tatiana y Castañeda Medica Francisco (...), en la actualidad cuentan con las siguientes obligaciones vigentes:

Castañeda Romero Cindy Tatiana: pagaré N° 114950203, con un monto inicial de \$74.381.528 (recoge los pagarés N° 41619700 y 41620000 de la señora Romero Ruíz Lilia Aurora (...)).

Castañeda Medica Francisco: pagaré N° 114363100, por valor de \$85.000.000, crédito nuevo el cual fue desembolsado el 9 de octubre de 2017"

De esta manera observa este Juzgador que no media manifestación de la voluntad de las partes de este litigio de novar la obligación que aquí se ejecuta, no media prueba alguna que soporte dicho argumento que procura extinguir la deuda reclamada, no media ninguna sustitución de una obligación nueva por otra anterior, como en efecto ocurrió en la novación subjetiva de las obligaciones que mantenía la señora Romero Ruíz Lilia Aurora, trasladando la misma a su hija y demandada en esta causa.

¹ 6 Sentencia de 14 de septiembre de 1927 (G. J. XXXIV, 336).

² Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Sala Civil. M.P. Homero Mora Insuasty. Radicación 76001.31.03.012.2011.00518.03 del 22 de octubre de 2020

³ Folio 56, Cuaderno 1

⁴ Folio 57 a 62, Cuaderno 1



Y es que, si en gracia de discusión se aceptara la intención de novar la obligación contenida en el título base de la ejecución, es menester tener presente lo previsto en el artículo 1692 del C. C, el cual establece que si la nueva obligación está sometida a condición no hay lugar a la novación, artículo que a la letra reza:

“ARTICULO 1692. <NOVACION DE OBLIGACIONES CONDICIONALES>. Si la antigua obligación es pura y la nueva pende de una condición suspensiva, o si, por el contrario, la antigua pende una condición suspensiva y la nueva es pura, no hay novación, mientras está pendiente la condición; y si la condición llega a fallar o si antes de su cumplimiento se extingue la obligación antigua, no habrá novación.

Con todo, si las partes, al celebrar el segundo contrato convienen en que el primero quede desde luego abolido, sin aguardar el cumplimiento de la condición pendiente, se estará a la voluntad de las partes.”

Caso en el cual, al absolver el interrogatorio de parte la representante legal de la ejecutante señaló que para la materialización del pagaré No. 134291700 se requería de la constitución de hipoteca sobre un inmueble de propiedad del núcleo familiar de los ejecutados, hipoteca que se corrobora con el concepto jurídico adiado 8 de octubre de 2016, en el cual se indica que:

“Me permito informar que con relación de la solicitud de crédito de la asociado FRANCISCO CASTANEDA MEDICA por valor de \$85 000 000 OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE, ofreciendo con garantía hipotecaria el inmueble ubicado en Bogotá CL 95 No 68D-20 Apto 402 M.I. 50C-1277153 es suficiente garantía para el crédito solicitado, el valor comercial del inmueble es \$ 185.305.000”

Condición frente al cual la ejecutada Cindy Castañeda Romero, adujo en el interrogatorio de parte que no se había llevado a cabo dicha garantía hipotecaria por cuanto el inmueble era de propiedad de su señora madre, dejando sin sustento el argumento aludido por la ejecutada.

Observándose de contera, una coexistencia de obligaciones que no han podido ser satisfechas por los sujetos que conforman el extremo pasivo de esta litis, sin que se observe además, prueba alguna que desvirtué que el cartular fuera llenado por un valor diferente al debido y en contravía de la autorización dada para tal efecto; es más, las instrucciones escritas recibidas, se acompasan con lo dispuesto en el artículo 622 del Código de Comercio, que para ilustración, en lo pertinente señala:

“Si en el título se dejan espacios en blanco cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora.

Una firma puesta sobre un papel en blanco, entregado por el firmante para convertirlo en un título-valor, dará al tenedor el derecho de llenarlo. Para que el título, una vez completado, pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de completarse, deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello”.

Es decir que el anterior texto normativo, se puede “deducir que el título valor suscrito en blanco deberá ser diligenciado de acuerdo con las instrucciones escritas o verbales que acordaron las partes”⁵. sin que exista prueba que contravenga lo autorizado por los suscriptores del pagaré base de recaudo.

⁵ Sentencia T – 968 de 2011



Es decir, que el monto anotado efectivamente se impuso como fundamento a lo adeudado por la parte demandada, sin existir prueba alguna de que no haya así acontecido, menos de que se hubiese efectuado un pago liberatorio total o parcial aspecto que fuera así aceptado por los ejecutados al absolver el interrogatorio de parte, aunado a que, solo se limitó la defensa a poner de manifiesto una supuesta intención de novación que nunca se concretó, sin aportar prueba fehaciente de su dicho; argumento que toma asidero, teniendo en consideración el histórico de pagos allegado por la entidad demandante que denota varias obligaciones vigentes, incluida la que es objeto de cobro. De esta manera, queda sin piso el argumento elevado y en contraste queda constatado que media una obligación insoluta por el monto que se ordenara satisfacer

En efecto, no obra en el plenario prueba alguna que diera cuenta de no mediara obligación, menos de no autorizar el diligenciamiento del cartular, debiéndose tener en claro, lo reglado en el artículo 621 del Estatuto Mercantil, en cuanto a la literalidad del título y la autonomía del derecho allí incorporado; que en consecuencia no se encuentra soslayado, ante la falta probatoria que desvirtuó el monto debido y su dependencia en otro acto jurídico.

En ese mismo sentido, vale resaltar, que la contestación de la demanda resulta insuficiente para sustentar los medios exceptivos propuestos, pues nótese que los fundamentos de estas son ínfimos, pues nada dice de la forma de realizarse un negocio que deviniera de la creación del pagaré allegado, menos que dicho acto no naciera a la vida jurídica, o que se encontrara en algunas de las extinciones que señala el artículo 1625 del Código Civil, pero **soportadas**. Por lo que, al no existir ninguna información que pueda ser cotejada, solo puede este funcionario atender a lo contenido en el báculo de la acción, en este contexto, recuérdese que de conformidad con los artículos 1757 del Código Civil y 167 del Código General del Proceso, las partes o sujetos procesales interesados en la contienda tienen el deber de acreditar el factum en que fundamentan tanto las pretensiones como los medios exceptivos formulados, es decir, soportan, individualmente, el peso o carga probatoria para así dar idóneo respaldo a sus aseveraciones, siendo, por ello, imperioso acudir a cualquier medio a que alude el artículo 165 de la última obra citada, logrando de esa manera que el operador judicial, previo valoración, dirima el conflicto sometido a su consideración. Resultando insuficiente para tal propósito su simple manifestación, por razón que a nadie le es dado el privilegio de que su mero dicho sea prueba de lo que afirme, tal como lo ha precisado la H. Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil:

“es verdad que, con arreglo al principio universal de que nadie puede hacerse su propia prueba, una decisión no puede fundarse exclusivamente en lo que una de las partes afirma a tono con sus aspiraciones. Sería desmedido que alguien pretendiese que lo que afirma en un proceso se tenga por verdad, así y todo sea muy acrisolada la solvencia moral que se tenga. De ahí que la Corte Suprema de Justicia haya dicho en un importante número de veces... que ‘es principio general de derecho probatorio y de profundo contenido lógico, que la parte no puede crearse a su favor su propia prueba. Quien afirma un hecho en un proceso tiene la carga procesal de demostrarlo con alguno de los medios que enumera el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, con cualesquiera formas que sirvan para formar el convencimiento del Juez. Esa carga... que se expresa con el aforismo onus probandi incumbit actori no existiría, si al demandante le bastara afirmar el supuesto de hecho de las normas y con eso no más quedar convencido el Juez”⁶

⁶ Sent. de 12 de febrero de 1980 Cas. civ. de 9 de noviembre de 1993. G.J. CCXXV, pag. 405



Así las cosas, estando ante la falta total de pruebas que acrediten los fundamentos fácticos en que se fundan las excepciones en lo que atañe a extinción de la obligación por alguna de las causas señaladas en el artículo 1625 del Código Civil, en concreto, la novación, no queda más que declararlas no probadas, ordenando entonces, seguir adelante con la ejecución, máxime cuando el pagaré base de la ejecución, reúne las condiciones que señala la Ley mercantil como la procesal para la viabilidad de su cobro forzado, sin que exista algún otro medio probatorio que acredite la oposición presentada por la encartada y enerve la orden de pago inicial.

III. DECISIÓN

En razón y mérito de lo expuesto, el **JUZGADO CINCUENTA Y CUATRO (54) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de mérito propuestas y denominadas **Novación y cobro de lo no debido**, por las razones pronunciadas en la parte motiva.

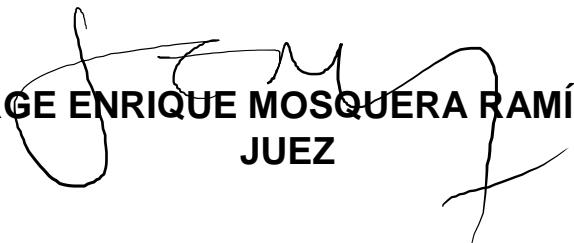
SEGUNDO: ORDENAR seguir adelante la ejecución conforme con el mandamiento de pago adiado 4 de abril de 2019.

TERCERO: ORDENAR se practique la liquidación del crédito atendiendo lo dispuesto en el artículo 446 del Código General del Proceso.

CUARTO: DECRETAR el avalúo y posterior remate de los bienes embargados y secuestrados dentro del presente proceso y los que en el futuro fueren objeto de cautela.

QUINTO: CONDENAR en costas de la presente acción a la parte demandada. Tásense teniendo como agencias en derecho la suma de **\$ 4.341.000.00 M/cte**.

NOTIFÍQUESE,


JORGE ENRIQUE MOSQUERA RAMÍREZ
JUEZ

Firmado Por:

JORGE ENRIQUE MOSQUERA RAMIREZ
JUEZ



JUZGADO 054 MUNICIPAL CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-BOGOTÁ, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

8f96821f4648d823c44db2d540d1cf38419d85d24537958c1810cd78f9347eba

Documento generado en 28/07/2021 08:56:40 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>